

Santiago, catorce de mayo de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En autos RIT O-151-2023, RUC 2340480303-4, del Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, caratulados “Rioseco Vega Víctor con Municipalidad de Copiapó”, por sentencia de once de septiembre de dos mil veintitrés, se desestimó la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones.

El demandante dedujo recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó, por resolución de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, lo rechazó.

En contra de este último pronunciamiento la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos a relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existan distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia en contra de la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que la materia de derecho que se solicita unificar consiste en determinar la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos de la Administración del Estado, en atención a si las funciones desplegadas corresponden a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si se ejecutaron bajo índices de subordinación y dependencia.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo, dictadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en los autos Rol N° 61-2018 y por esta Corte en los antecedentes N° 50-2018, 1.020-2018 y 2.995-2018, en las que se sostuvo que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las



relaciones habidas entre personas naturales y organismos de la Administración del Estado, en la medida que se desarrollen fuera del marco legal que los autoriza a contratar sobre la base de honorarios, y que revelen características propias de un contrato de trabajo.

Dicho criterio jurídico condujo a calificar como laborales los contratos celebrados entre los demandantes y los órganos demandados en cada caso; en el primero, respecto de un psicólogo que se desempeñó en la Municipalidad de La Pintana, en contexto del programa “Apoyo Integral Mujeres de la Comuna”, que excedía del cometido específico, dada su continuidad, el objetivo perseguido y la amplitud de las usuarias del servicio; el segundo, se trató de una asistente social que prestó sus servicios a la Municipalidad de Recoleta, entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, como asesora laboral y familiar, debiendo revisar y digitar fichas de protección social, en el marco de un convenio de transferencia de fondos celebrados entre esa demandada y el FOSIS, cumpliendo jornada de 44 horas semanales y recibiendo instrucciones; en el tercero, se aplicó la misma tesis en favor de un profesional que se incorporó a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, entre 2 de junio de 2013 y el 28 de febrero de 2017, como asistente social en el programa "Entidad Patrocinadora, EP y Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, Oficina de la Vivienda", en funciones de atención de público y elaboración de diagnósticos sociales, que debía ejecutar en un horario determinado, con obligación de asistencia, sujeto a la dependencia e instrucciones de jefaturas y percibiendo el pago mensual de la debida contraprestación; y en el último, se arribó a la referida decisión respecto del vínculo desarrollado entre la Municipalidad de La Reina y un profesional que ejecutó labores como “gestor territorial”, adscrito a programas ejecutados por la Dirección de Desarrollo Comunitario, entre el 21 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, con obligación de cumplir horario y de emitir un informe mensual al encargado de la unidad supervisora, recibiendo un estipendio mensual y fijo.

**Tercero:** Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que el demandante dedujo, basado en las causales establecidas en los artículos 478 letras b) y c), y 477 del Código del Trabajo, la última acusando la infracción de sus artículos 1°, 7°, 8°, 63, 162, 163, 168, 173, 443, 454 N°3, 458 y 459 N°4, del artículo 4° de la Ley N° 18.883 y del artículo 19 del Decreto Ley 3.500, de 1980.

En sustento de la decisión, respecto del primer motivo, se estimó que no sólo los razonamientos del tribunal aparecen debidamente fundados en relación



con la prueba rendida, sino que el recurrente tampoco precisa que máximas de la experiencia han sido inobservadas, cuáles corresponden a meras afirmaciones sin sustento empírico, ni cómo es posible corroborar la existencia de algún defecto de valoración, porque sus asertos no se sustentan en elementos de juicio que permitan darle contenido, con lo que no pasan de ser más que una discrepancia de opinión; en cuanto al segundo, porque el recurso se aboca a reiterar que concurren los elementos de una relación laboral, haciendo referencia a la prueba testimonial y documental que rindió, lo que determina que, en el fondo, la construcción argumental de esta vía de nulidad no difiera de la que podría servir de soporte a la causal enarbolada como principal, pues su argumentación orbita sobre la concurrencia de elementos fácticos inamovibles que llevarían a la calificación de los hechos como pretende su parte, sin que exista un vicio o defecto en los razonamientos de la judicatura del grado que tenga la virtualidad necesaria para imponer la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas, y, en lo que concierne al tercero, se reiteró que, como el anterior, se trata de un motivo de invalidación que importa la aceptación de los hechos que el tribunal de mérito ha dado por concurrentes, y que sobre esa base y considerando los argumentos desarrollados en el fallo impugnado, que condujeron a colegir que no se encuentra justificada en autos la concurrencia de los elementos propios de la relación laboral que se reclama, no es posible realizar el ejercicio de subsunción que demanda el actor, entre las conclusiones fácticas del caso y las normas contenidas en los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, lo que, a su vez, impide dar por configurada la hipótesis de falsa aplicación de la ley respecto de los artículos 4° de la Ley 18.883 y 1° del citado código.

**Cuarto:** Que, según se observa, las sentencias ofrecidas para su cotejo no resultan idóneas para los efectos previstos en el artículo 483-A del Código del Trabajo, por fundarse en una situación distinta que impide la homologación que se pretende.

En efecto, si bien en ellas se aplica la tesis jurídica que pretende el recurrente, lo cierto es que se sustentan en hechos diversos a los establecidos en la que se impugna, pues en las primeras se asentó la existencia de servicios prestados de manera continua y estable, bajo diversos indicios de subordinación, circunstancias que condujeron a descartar que se tratase de cometidos específicos, excediendo del marco legal que autorizó su contratación y



ajustándose a los términos en que, conforme a los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, permiten presumir que se está en presencia de un contrato de trabajo; sustrato fáctico contrario al de la que se impugna, en que se dio por probado que el actor ejecutó cometidos específicos en favor de la demandada, y que lo hizo sin la concurrencia de aquellos elementos que caracterizan la subordinación y dependencia respecto de un empleador, que es propia de todo contrato de trabajo.

**Quinto:** Que, cabe recordar, que un requisito esencial para la procedencia del recurso en análisis es que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, la decisión haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, es menester la existencia de una contradicción jurisprudencial que coloque a esta Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto debe prevalecer. Sin embargo, a la luz de lo expuesto, tal exigencia no se verifica en el caso, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, razonamientos que conducen a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Redacción a cargo de la abogada integrante señora Fabiola Lathrop Gómez.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 12.029-24.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Andrea Muñoz S., Jessica González T., Mireya López M., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C. y Fabiola Lathrop G. No firma la ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, catorce de mayo de dos mil veinticinco.





En Santiago, a catorce de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

